M^a DEL CARMEN BUENDIA RUBIO

FISCAL DEL TSJ DE CASTILLA LA MANCHA

PROFESORA TUTORA EN LA UNED: DERECHO ROMANO, DERECHO PENAL, DERECHO PROCESAL, INTRODUCCIÓN AL DERECHO Y CRIMINOLOGÍA.

SOCIA FICP

I. Dogmática Jurídica y Dogmática Penal. II. Derecho Penal y Moral. III. Derecho Penal y Justicia. IV. Derecho Penal y Libertad.

I. Dogmática Jurídica y Dogmática Penal.

La Dogmática Jurídica se ocupa del estudio de determinado derecho positivo y tiene por finalidad, reproducir, aplicar y sistematizar la norma jurídica, tratando de entenderla y descifrarla, construyendo un sistema unitario y coherente.

Como funciones de la Dogmática se han señalado las siguientes:

- Una función expositiva, ordenadora, sistematizadora, dedicada a describir el derecho positivo.
- Una función que pretende ser descriptiva, en el sentido de determinar como plausible una interpretación determinada del contenido del derecho positivo, pero también señala razones para inducir al aplicador de la ley a preferir esa interpretación sobre otras.
- Una función que pretende ser crítico-prescriptiva, en la que el intérprete acepta que la solución que propone para la regulación de un caso no puede ser derivada del derecho positivo, y en dicho sentido, postula que la mejor solución implica el rechazo del mismo, del derecho positivo vigente, proponiendo el abandono de la norma vigente y su reemplazo por una nueva, distinta.

En cuanto a la Dogmática jurídico penal, trata de averiguar el contenido concreto de las normas penales, sus presupuestos, sus consecuencias, delimitar los hechos punibles de los que no lo son, determinar la forma en que debe llevarse a cabo la ejecución de la norma penal. La dogmática jurídico penal cumple una de las más importantes funciones que tiene encomendada la actividad jurídica en un Estado de Derecho, cual es, la de garantizar los derechos fundamentales del individuo frente al poder arbitrario del Estado que, aunque se encauce dentro de unos límites, necesita del control y de la seguridad de los mismos.

La Dogmática jurídico penal se caracteriza por lo siguiente:

- Constituir una ciencia del deber, ya que también se ocupa del estudio de la conducta humana desde un punto de vista valorativo.

- Es cultural, puesto que su objetivo ha sido extraído del ámbito de la cultura.
- Es normativa, ya que se expresa a través de proposiciones cuya corrección o no, deriva de su confrontación con las valoraciones contenidas en las normas legales.
- Es hermenéutica, puesto que el intérprete se enfrenta a un texto legal cuyo estudio abarca desde sus orígenes y antecedentes, el entorno en el que surge y su tenor literal.

II. Derecho Penal y Moral.

El tema de las relaciones entre el Derecho y la Moral ha sido muy tratado por los analistas del Derecho, pudiendo afirmar que son los dos sistemas normativos más relevantes en el ámbito de regulación de la vida social¹. Las relaciones entre Derecho y Moral son innegables hasta el punto de que incluso las llamadas tesis de la separación no niegan las relaciones empíricas existentes entre ambos. Si bien, esa relación íntima entre los mismos no puede llevarnos a confundirlos ni a mezclarlos, aunque existe una ligazón íntima entre ambos, no obstante, son autónomos.

La doctrina mayoritaria sostiene desde hace años que al Derecho no le incumbe la función de sancionar conductas inmorales sino que debe limitarse a la protección de los bienes jurídicos. La preservación de la moral como tal no es misión del Derecho Penal.

En la praxis, aunque el Derecho penal es capaz de crear usos, costumbres² y reforzar la moral, ello no significa que la punición de una conducta tenga su razón de ser en su carácter inmoral.

La autonomía entre el Derecho y la Moral se manifiesta en el ámbito del Derecho Penal, por medio de tres principios que afectan a diversos ámbitos: el delito, el proceso y la pena.

En lo relativo al ámbito del *delito* o de justificación de la intervención punitiva, se establece como principio que el Derecho Penal no tiene como misión configurar una determinada moral, sino prevenir y sancionar acciones u omisiones que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos. La validez fáctica de este principio puede verse comprometida por la criminalización de conductas con exclusivos fines pedagógicos o educativos cuya admisión significaría aceptar una injerencia del Derecho Penal en la esfera interna, en la estructura de valores del individuo.

1 GARZÓN VALDÉS, E. "Derecho y Moral". Edit. Gedisa, 1998, p. 19, citado por Luis Miguel Reyna Alfaro en Dogmática y Ley Penal. Tomo I. edit. Marcial Pons., Ediciones jurídicas y sociales, 20004, p.766.

2 SILVA SANCHEZ, J.M. Aproximación al Derecho Penal contemporáneo, edit. Bosch, 1992, p.300.

En este ámbito hay que hacer referencia a la función y labor de los *gestores atípicos de la moral*, entendiendo por tales todas aquéllas instituciones u organismos no gubernamentales destinados a la defensa de intereses vinculados a los derechos humanos, pues bien, estos colectivos han provocado o conseguido la punición de conductas en algunos sectores donde la intervención del Derecho Penal era mínima, así ocurre en el supuesto de la criminalización por atentados contra el medio ambiente.

- En lo relativo al ámbito del *proceso penal*, deberá acreditarse la efectiva lesión o puesta en peligro de un bien jurídico y la responsabilidad del imputado en la misma. El ciudadano debe ser juzgado por *aquéllo que ha hecho* y no, como en el juicio moral, por *lo que es*.

El Derecho procesal penal, como rama destinada a realizar los objetivos del Derecho penal material, asume respecto de aquél, una posición de unión que permite atisbar la orientación político-criminal del Estado que da cobertura a ambos.

Los fines de la Política Criminal no pueden ser otros, en el Estado democrático y social de Derecho, que los de realización de los derechos fundamentales, los cuales tienen como eje sustancial la libertad y la dignidad de la persona. Por tanto, el Derecho procesal penal debe atender al principio de culpabilidad por el hecho, en contraposición a la denostada culpabilidad de autor³. Aunque la culpabilidad, en ambos casos (culpabilidad del hecho y de autor) supone un juicio sobre el autor, en la culpabilidad por el hecho el juicio se realiza a partir de una conducta socialmente reprobada, calificada por la ley como delito, y sólo respecto de la culpabilidad que de dicho comportamiento se infiere, mientras que en la culpabilidad de autor, el juicio se extiende a la personalidad del agente infractor y a su forma de conducirse en la vida.

- Respecto del tercer ámbito, lo constituyen los fines de la *ejecución de la pena*. Así, al ejecutar la misma, no debe tenderse al mejoramiento moral de los ciudadanos, a una resocialización para la moralidad ya que ello supondría una intromisión intolerable en las esferas de libertad del individuo. El objetivo de la resocialización debe ser el de educar al penado en el respeto al orden jurídico establecido y los valores que le son propios. De hecho, el tratamiento sobre el que se basa la resocialización no es una obligación del penado sino, más bien, un derecho que podrá hacer efectivo o no⁴.

3 REYNA ALFARO, L.M. “Derecho Penal, Ética y fidelidad al Derecho: una aproximación a las relaciones entre Derecho y Moral en el Funcionalismo Sistémico”, p. 771 en “Dogmática y Ley Penal”. Edit. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 2004.

4. R.D. 190/1996 de 9 de febrero por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, artículo 112,3.

Haremos en este apartado, una mención siquiera somera al funcionalismo sistémico del alemán Günther Jakobs, profesor de la Universidad de Bonn y, alumno de Hans Welzel que elaboró una de las construcciones teóricas de mayor impacto en el Derecho Penal.

Hans Welzel sostenía que la misión fundamental del Derecho penal era la de asegurar la “vigencia de los valores del acto ético sociales positivos”, esta posición plantea la necesidad de que el ciudadano asuma los valores éticos que dimanen de cada norma jurídico penal. En el mismo sentido, Hegel planteaba la existencia de unidad entre la faceta moral del Estado y la correspondiente a los ciudadanos.

La orientación de Jakobs hacia la función ética que corresponde al Derecho Penal, deriva de la doctrina de Welzel y, a su vez, de la de Hegel.

Para Jakobs, el sistema penal se organiza en atención a la misión que al Derecho Penal corresponde, es decir, a su misión social⁵. Es la relación entre Sociedad y Derecho Penal lo que permite a Jakobs atribuir al orden jurídico y en particular al Derecho penal, una función de promoción que le permita no sólo alcanzar el nivel evolutivo de la Sociedad sino también recordar a la misma que se deben tener en consideración determinadas máximas que se consideran indisponibles⁶. Jakobs pretende configurar la identidad de una determinada sociedad, adquiriendo por ello, una relevancia decisiva las normas que configuran tal identidad, convirtiéndose en modelo de conducta, por lo que su infracción tendrá como consecuencia la imposición de una pena, la cual cumple una función de prevención general a través del reconocimiento de la norma, una de cuyas manifestaciones es la *fidelidad hacia el Derecho* o lealtad comunicativa que ha sido uno de los aspectos más criticados del pensamiento de Jakobs al considerar que con la misma se violentaría la autonomía moral del ciudadano, tratando de imponerle una determinada conciencia ética, lo que supone una intervención en el ámbito interno del mismo. Si bien, a lo largo de su obra, Jakobs se va alejando del pensamiento de Hegel y se aproxima más al de Luhmann, el cual propone una distinta configuración del Derecho, dejando una clara evidencia de la distancia entre Derecho y Moral, disociación que consideraba esencial en aras de la libertad, considerando que el Derecho, concretamente el Derecho Penal, carece de legitimación para dirigir las conductas de los individuos y que su fin único es la *reafirmación de la vigencia de la expectativa normativa*, manteniendo a la norma como modelo de orientación de los contactos sociales⁷.

5. JAKOBS, G. Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y Teoría de la Imputación. Traducción de Joaquín Cuello Contreras y Jose Luis Serrano González de Murillo, 2ª edición. Madrid, edit. Marcial Pons, 1997, p 9.

6. JAKOBS, G. Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho Penal funcional.. p 24.

7 JAKOBS, G. Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y Teoría de la Imputación. p. 9.

III. Derecho Penal y Justicia.

La necesidad de castigo es consustancial al ser humano, pero el castigo sólo encuentra su justificación en la norma. Sin normas no puede haber sanciones. Antes de la separación sistémica del Derecho, todo incumplimiento normativo ocasionaba una sanción⁸. En la actualidad es el Derecho Penal el que establece las posibles sanciones a las conductas que vienen tipificadas en el mismo.

La evolución del Derecho corre pareja a la evolución social, así, la complejidad normativa ha aumentado pero lo que no ha cambiado es la concepción de la Justicia, la cual siempre ha existido y existirá.

La justicia para algunos es un concepto universal, no normativo. Resulta problemático averiguar su contenido, siendo preciso acudir al conjunto normativo, al Derecho, para determinarlo, si bien, este último, en la medida en que es producto del ser humano, de una determinada sociedad, no siempre resulta justo.

La justicia, desde un punto de vista moral tiene un valor absoluto pero no en cuanto cualidad normativa.

La justicia se mueve en el terreno del Derecho Natural, -entendiendo por tal el que se contrapone al Derecho Positivo-, en el campo de la ética. El Derecho Natural se apoya en un principio metodológico concreto, cual es, el concepto de que existe una idea de Derecho justo unívoca, reconocible y demostrable, representa una serie de valores no normativos. Existe una dualidad entre el Derecho Natural y el Derecho Positivo, por encima de éste se halla aquél. El Derecho Natural es siempre un conjunto normativo moral, a modo de fundamento o esencia de las normas legales, por lo que no es propiamente "Derecho".

Si la Justicia es un concepto relativo y moral, deberíamos cuestionarnos porqué se incluye en el discurso legal, ello es porque la misma sólo se realiza normativamente. Así, podemos citar determinados preceptos de nuestro Código Penal en los que se hace referencia a la justicia o injusticia como parte integrante del tipo penal. En dicho sentido podemos señalar el artículo 320,1º del vigente Código Penal al hacer referencia a "La autoridad o funcionario público que, *a sabiendas de su injusticia*, haya informado favorablemente, instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación..., construcción, edificación o concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanísticas vigentes..." En igual sentido el artículo 320,2º del Código Penal al referirse a "La autoridad o funcionario público que por sí o por medio de un organismo colegiado, haya resuelto o votado a favor de los instrumentos de planeamiento...o concesión de las licencias a las que se refiere el apartado anterior, *a sabiendas de su injusticia*". En similar sentido, el artículo 322 del

8. PRAT WESTERLINDH, C. "El fin del Derecho Penal: la Libertad", en Dogmática y Ley Penal, edit. Marcial Pons Ediciones jurídicas y sociales S.A., Madrid, 2004. p. 721.

Código Penal, al referir: “La autoridad o funcionario público que, *a sabiendas de su injusticia*, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos...”; castigando igualmente a “la autoridad o funcionario público que por sí o como parte de un organismo colegiado, haya resuelto o votado a favor de su concesión, *a sabiendas de su injusticia*”. De forma similar, el artículo 404 del Código Penal, referente a la prevaricación, castiga a “La autoridad o funcionario público que, *a sabiendas de su injusticia*, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo...” .

Es de resaltar que el legislador, además de hacer referencia a la justicia o injusticia en los tipos penales reseñados, orienta este término como elemento subjetivo, lo cual hace más difícil su apreciación.

La justicia, por la excesiva relatividad de su concepto, no constituye un fin para el Derecho Penal, los conceptos jurídicos son relativos y más los penales que son los que más sufren la culturalidad y temporalidad de las normas, por tanto, el valor que siempre se ha asignado al Derecho Penal como un Derecho justo, se desvanece debido a la relatividad de dicho concepto, no siempre coincide lo “justo” con la norma vigente aplicable al caso concreto.

IV. Derecho Penal y Libertad.

Si la Justicia, como valor, no pertenece a las normas penales, podemos concluir que la finalidad del Derecho es la libertad, la cual, puede ser un valor que se corresponda con el ámbito moral pero no cabe duda de que también es un concepto jurídico. Las normas jurídicas deben orientarse a conseguir la mayor libertad posible en un marco social determinado. La ética o la moral pueden atribuirse a otros ámbitos⁹

La libertad, a diferencia de la justicia, es acultural e intemporal. El problema son los límites de la misma, así, para Kant, los límites de la libertad individual se encuentran en la libertad de los demás¹⁰.

Hegel¹¹ orientó el concepto de la libertad hacia la voluntad, hablando de libertad libre, critica la definición de Kant por considerar que sólo se refiere a una determinación

9. Moral: “*Ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia*” Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española p 1040. Ética: “*Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana*” Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, p. 683-

10 KANT, La metafísica de las costumbres, p. 39. Citado por PRAT WESTERLINDH, C. en “Dogmática y Ley Penal, edit. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid. 2004, p.725.

11 HEGEL, Fundamentos de la Filosofía del Derecho, p. 156. Citado por PRAT WESTERLINDH, C. en “Dogmática y Ley Penal, edit. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid. 2004, p 725,

negativa de la libertad. Hegel introduce lo “racional” como límite a la libertad, entendido como algo universal, formal, según este criterio, la libertad se sustrae a la propia individualidad.

De las dos concepciones filosóficas reseñadas, se deriva una consecuencia, cual es, que la libertad tiene siempre dos dimensiones, una negativa que sería la seguida por Kant y otra positiva que sería la seguida por Hegel, considerando la libertad como concepto racional y universal que opera sobre la esencia de la voluntad del ser humano. Podemos añadir una nueva dimensión, la libertad normativa, necesaria para que la libertad individual se desarrolle, para ello, la misma debe estar regulada en un sentido favorecedor de la misma, no en sentido limitativo. El Derecho Penal persigue asegurar la libertad de todos y para ello precisa de las normas, se trata de que éstas vayan dirigidas hacia la libertad más que hacia la seguridad.

Las normas penales persiguen la libertad y este fin debe estar recogido en las Constituciones o Normas Fundamentales, incluso en marcos normativos inferiores debe estar protegida la libertad.

Se sanciona penalmente una conducta porque lesiona el marco de convivencia ordenada recogido por las leyes penales, la libertad garantizada normativamente, la cual sólo puede conseguirse en una sociedad avanzada.

Los preceptos normativos no penales, como los que tienen que ver con la organización del Estado o sus instituciones básicas o los que regulan las relaciones jurídicas entre los individuos, no tienen por qué proteger la libertad, si bien, los mismos son necesarios para que la libertad se desarrolle en un determinado marco social.

Mediante la libertad se hace efectiva la dignidad humana, ésta no es posible sin aquélla.

El aseguramiento de la libertad tiene un resultado práctico. Tradicionalmente, los tipos penales se definían por la causación de un resultado, si quedaba demostrado que el acusado había intervenido de alguna forma en el resultado típico era castigado. El problema es cuando el legislador no acude al resultado para definir la conducta típica o cuando el mismo, el resultado, es su esencia. Esto tiene lugar cuando se trata de actos preparatorios punibles como la conspiración, la proposición o provocación para delinquir, la tentativa o los delitos de peligro.

Así, cuando se trata de actos preparatorios punibles o de tentativa, en el supuesto de que los mismos pongan en peligro los bienes jurídicos en cuestión, es necesario su castigo. De esta manera se establece una graduación en el iter críminis, que abarca desde la impunidad del pensamiento criminal, la atenuación mayor cuando se trata de actos preparativos punibles que ocurre sólo cuando el legislador considera típicamente dicha posibilidad, ex artículo 18,2 del Código Penal y, una menor atenuación en los casos de tentativa acabada o inacabada. Es decir, a mayor lejanía de lesión, menor responsabilidad del sujeto infractor. La libertad ordenada normativamente se ve lesionada por una tentativa porque la víctima o víctimas ven amenazadas seriamente su

libertad y las normas que la sustentan. Será el juez en cuestión quien haya de valorar conforme a todas las circunstancias concurrentes y la prueba practicada, si la conducta llevada a cabo por el autor infractor atenta contra la libertad normativa, y no sólo contra la libertad individual de la víctima.

De otra parte, respecto de los delitos de peligro, hay que reseñar que la fundamentación de su castigo se debe a la necesidad de garantizar por el Estado la seguridad de los individuos, entendiéndose por tal, la libertad ordenada.

La referencia a los delitos de peligro abstracto puede ser extendida también a los delitos de peligro concreto, exponente de ello lo es el artículo 380 del Código Penal que castiga al que “...condujere un vehículo a motor o ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o integridad de las personas...”. Como exponente de los delitos de peligro abstracto lo es el artículo 379 del Código Penal que castiga al que “...condujere un vehículo a motor o ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana u ochenta kilómetros por hora en vía interurbana, a la permitida reglamentariamente...” y al que “...condujere un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas...”. El problema no lo es tanto en los delitos de peligro concreto, sino en los de peligro abstracto que se fundamentan en la peligrosidad típica de la acción. En este sentido, Jakobs¹² fundamenta el castigo porque no sólo perturban el orden público sino que lesionan un derecho a la seguridad, entendida en sentido normativo. De tal forma que los delitos de peligro abstracto se reconvierten en delitos imprudentes de eventual resultado.

El castigo penal de las imprudencias resulta problemático porque el desvalor de la acción es difícilmente apreciable y desaparece la intencionalidad criminal como criterio rector de la conducta, de tal forma que la esencia de estos delitos se constriñe a la infracción del deber de cuidado exigible al autor, por lo que el reproche penal se halla en el conocimiento de la situación y la no evitación del resultado, en tanto que el desconocimiento de la situación viene motivado por la falta de diligencia del autor. Lo que define por tanto la imprudencia es la culpa inconsciente o sin representación de la conducta.

Las conductas imprudentes no siempre se han sancionado penalmente sino que en muchos casos se han reconducido al ámbito civil. La distinción entre el ámbito civil y penal tiene su fundamento en lo referente a la relevancia de la norma infringida, aquélla que obliga a actuar o no, ante situaciones concretas de riesgo de lesión normativa. La imprudencia del autor vendría constituida por una representación errónea de la situación creada o ya dada ante él mismo. Tradicionalmente se ha considerado que el reproche

12 JAKOBS, G. Sociedad, norma y persona en una teoría de un derecho penal funcional. p. 47, citado en PRAT WESTERLINDH, C. El fin del Derecho Penal: la libertad, en Dogmática y Ley Penal. Edit. Marcial Pons ediciones jurídicas y sociales S.A. Madrid 2004.

de este error es inferior al que deriva del manifiesto conocimiento de que se está infringiendo una norma, es la teoría del *crimen culpae* en virtud de la cual se consideraba que todas las conductas podían ser objeto de imprudencia, con la consiguiente atenuación, si bien, en la actualidad se sigue el criterio de los *crimina culposa*, ex artículo 12 del Código Penal: “*Las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley*”, esto significa que no necesariamente ha de establecerse una pena inferior para la modalidad imprudente porque ésta puede ser la única susceptible de ser castigada, operando el castigo penal sobre la base de la importancia de la norma vulnerada. Aquí se destaca la importancia para el desarrollo de la libertad ajena, porque la conducta del autor imprudente no afecta a su libertad, el mismo se cree amparado por la libertad normativa recogida en los preceptos penales, siendo necesario sancionar dicha creencia errónea.

La libertad normativa como principio rector del Derecho Penal debe ser protegida no sólo ante atentados directos procedentes del conocimiento normativo concreto sino también ante ataques que nacen de la ausencia del mismo, pero sí de un conocimiento muy probable de afectar a la libertad de los demás y pese a ello, el autor decide actuar o no actuar, como ocurre en los supuestos omisivos.

CONCLUSIONES:

En la presente comunicación tras una introducción relativa al concepto de la Dogmática jurídica y penal, se ha tratado de establecer que, a pesar de la íntima ligazón que existe entre el Derecho penal y la moral, no obstante ambos son autónomos, desgranando dicha autonomía a través de tres conceptos, el delito, el proceso y la pena; tratando igualmente el funcionalismo sistémico de la obra de Jakobs que abarca desde una posición normativa similar a la de Welzel y Hegel para evolucionar hacia la concepción normativa seguida por Luhmann tendente a la disociación entre Derecho y moral.

Igualmente, se ha puesto de relieve que la justicia, como pretendido fin del Derecho penal, no constituye un valor normativo sino moral, la misma se mueve en el ámbito del Derecho Natural, constituyendo un valor absoluto desde el punto de vista moral, pero su gran relatividad le impide erigirse como fin del Derecho penal.

Por último, la libertad, considerada como verdadero fin del Derecho Penal, entendida en una nueva dimensión, como libertad normativa, la libertad garantizada normativamente.

BIBLIOGRAFIA

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española de la Lengua.

GARZÓN VALDÉS, E. “Derecho y Moral”. Edit. Gedisa, 1998, citado por Luis Miguel Reyna Alfaro en Dogmática y Ley Penal. Tomo I. edit. Marcial Pons,, Ediciones jurídicas y sociales, 2004.

HEGEL, Fundamentos de la Filosofía del Derecho, Citado por PRAT WESTERLINDH, C. en “Dogmática y Ley Penal, edit. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid. 2004,

JAKOBS, G. “Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y Teoría de la Imputación”. Citado por Luis Miguel Reyna Alfaro en Dogmática y Ley Penal. Tomo I. edit. Marcial Pons,, Ediciones jurídicas y sociales, 2004.

JAKOBS, G. Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional.

KANT, La metafísica de las costumbres, Citado por PRAT WESTERLINDH, C. en “Dogmática y Ley Penal, edit. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid. 2004,

PRAT WESTERLINDH, C. “El fin del Derecho Penal: la Libertad”, en Dogmática y Ley Penal, edit. Marcial Pons Ediciones jurídicas y sociales S.A., Madrid, 2004.

REYNA ALFARO, L.M. “Derecho Penal, Etica y fidelidad al Derecho: una aproximación a las relaciones entre Derecho y Moral en el Funcionalismo Sistémico”, en “Dogmática y Ley Penal”. Edit. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 2004.

SILVA SANCHEZ, J.M. Aproximación al Derecho Penal contemporáneo, edit. Bosch, 1992.